

1921
Abril-mayo

SERVICIO DE PUBLICACIONES AGRÍCOLAS
Estas «Hojas» se remiten gratis a quien las pide.

Año XV.
Núms. 8-9-10



MINISTERIO
DE FOMENTO

Hojas divulgadoras

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES

Ley de extinción de las plagas del campo y defensa contra las mismas, de 21 de mayo de 1908.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ENCAMINADAS A LA VIGILANCIA DE LOS CAMPOS, AL TRATAMIENTO DE LOS FOCOS QUE PUDIERAN DETERMINAR EL ORIGEN DE UNA PLAGA Y A LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA MISMA, CON EXCEPCIÓN DE LA FILOXERA Y LA LANGOSTA

Artículo 1.º Se considera plaga del campo, para los efectos de la presente Ley, todo estado patológico o daño ocasionado por criptógamas, especialmente hongos, y animales, principalmente insectos, cuando haya adquirido, o amenazara adquirir, en la localidad donde se hubiese presentado, caracteres de generalidad o de expansión suficientes para producir perjuicios de importancia en las plantas cultivadas.

Quedan, por tanto, incluidas en la presente Ley todas las enfermedades de los cultivos herbáceos y arbóreos que no constituyan masa forestal, debidas a causas a que alcance la definición anterior, previa la declaración, en cada caso, en la forma y por los órganos a que se refieren los artículos siguientes.

Art. 2.º En todos los términos municipales se creará una Junta local de Defensa contra las plagas del campo, encargada de vigilar e inspeccionar los predios agrícolas, a fin de conocer el estado de sus cultivos y determinar cualquiera alteración o síntoma sospechoso que pudiera afectarlos, determinando sus medios de extinción o preventivos que deban seguirse, de acuerdo con el informe

de los Ingenieros agrónomos de las provincias respectivas y del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería.

Se formará dicha Junta por tres mayores contribuyentes de los que residan habitualmente en la localidad entre los diez que paguen mayor cuota por riqueza rústica y pecuaria; dos individuos que formen parte de entidades agrícolas, y, si no existieren éstas, un Maestro de instrucción primaria y un Médico titular.

Esta Junta, que elegirá su Presidente y su Secretario, será nombrada por el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería.

La Junta local nombrará en concepto de Vocales asociados, para cada campaña o trabajos que realice a fin de combatir una plaga determinada, dos cultivadores de la planta o producto que se trate de preservar.

Art. 3.º Los propietarios y colonos, los Ingenieros de todas clases y sus Ayudantes, la Guardia civil, los Guardas municipales de campo, los Guardas jurados, los de montes y cuantos tuvieran a su cargo servicios de custodia o vigilancia rural, bien fueren pagados por el Estado, el Ayuntamiento o los particulares, quedan obligados a dar conocimiento a la Junta municipal de Defensa contra las plagas del campo de cualquier sintoma de enfermedad o alteración que observasen en los cultivos de la localidad.

A los infractores de esta disposición se les impondrá por la Junta local de defensa la multa de 1 a 100 pesetas, según las circunstancias, de cuya penalidad podrán alzarse ante el Jefe de Fomento, quien resolverá en definitiva, de acuerdo con el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería.

Art. 4.º Tan pronto como llegara a conocimiento de la Junta referida la existencia de algún sintoma sospechoso en los cultivos del término municipal donde ejerce sus funciones, practicará la oportuna inspección ocular, y en el plazo de tres días, a contar desde aquel en que se formuló la denuncia, manifestará por escrito al Jefe provincial de Fomento los datos que hubiese adquirido.

Dicha Autoridad acordará, desde luego, que un Ingeniero agrónomo gire una visita a la localidad invadida, clasifique la causa del mal, determine su intensidad y formule su dictamen, exponiendo en él los procedimientos más eficaces, rápidos y económicos para su extinción o para su aislamiento, si otro resultado no fuera posible.

Art. 5.º Con el dictamen formulado por el Ingeniero o Ingenieros agrónomos que hagan el reconocimiento, el Jefe de Fomento convocará al Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, el cual adoptará las resoluciones a que hubiere lugar, pudiendo ser alguna o varias de las siguientes:

a) La determinación de la enfermedad y de los medios conocidos para su curación;

b) La imposición, a todos los cultivadores de la especie vegetal de que se trate, de la obligación de efectuar los trabajos o aplicar los remedios de prevención o de curación tenidos por eficaces en cada caso;

c) La fijación del plan a seguir, tiempo de su realización y la forma y medida en que técnica y pecuniariamente haya de contribuir a su ejecución el dicho Consejo como auxiliar de la Junta local.

Cuando, sin determinarse síntomas de una plaga, se tema su

presentación por la experiencia de otros años y se conozca el modo de impedir su nacimiento, el Consejo impondrá la obligación a todos los terratenientes interesados de adoptar las medidas que la técnica recomienda, multándose con la suma de 25 a 300 pesetas al cultivador que, por negligencia, desidia o indiferencia, incurra en inobservancia de lo mandado. El importe de estas multas y de las del artículo anterior ingresará en el fondo provincial de extinción de plagas. El Jefe de Fomento hará efectivas las multas impuestas.

Art. 6.º Si un propietario no aceptase extinguir la plaga o ejecutar las medidas preventivas en la forma designada por la Junta local o Consejo provincial, o si, habiéndose allanado a efectuar los trabajos en armonía con lo dispuesto, no comenzase su ejecución dentro del plazo marcado, causando con su incuria y egoísmo perjuicios, ciertos o probables, a sus coterráneos, procederá desde luego a realizarlos la dicha Junta por cuenta y riesgo exclusivo del propietario, sin derecho, por parte de éste, a reclamación de ninguna especie.

Art. 7.º En el caso a que se contrae el artículo anterior, el Jefe provincial de Fomento, previo acuerdo del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, hará la oportuna declaración de utilidad pública para la extinción de la plaga de que se trate, y desde este momento podrá la Junta local de Defensa, con el personal técnico, ocupar la finca y comenzar en ella los trabajos necesarios para la extinción, limitándose esta ocupación al terreno indispensable para operar con el debido acierto y eficacia, y durando el tiempo necesario para la aplicación de los procedimientos de extinción.

Art. 8.º En el caso de que las medidas de extinción o preventivas propuestas resultaran lesivas para los intereses del propietario o del colono, o de ambos a la vez, por exigir la clase o el estado de la plaga la destrucción o deterioro de la propiedad de un particular para salvar la de la generalidad del vecindario, se formará por la Junta local de Defensa un presupuesto de indemnización, el cual aprobará el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, empezándose inmediatamente los trabajos, bajo la dirección del personal agronómico.

Si el interesado formulara oposición, se le dará audiencia por el Consejo provincial antes de dictar resolución. Esta será ejecutiva en todo caso, indemnizándose, antes de la ejecución, a los propietarios, aparceros o colonos, según a quien corresponda, siempre que éstos renuncien expresamente a cualquiera otra clase de recursos legales que les concedan las Leyes generales del Reino.

Art. 9.º Si alguna Cámara o Sindicato Agrícola, Comunidad de labradores o cualquiera otra Asociación de carácter rural, legalmente constituida, de acuerdo con el propietario de la finca atacada por el mal, y teniendo en cuenta los intereses que la Asociación representa, deseara, previos los requisitos expuestos, encargarse de la extinción de la plaga, podrá solicitarlo del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, exponiendo los fundamentos de su pretensión. El referido Consejo resolverá la petición sin ulterior recurso.

Art. 10. Para otorgar dicha autorización será necesario que la Asociación recurrente esté constituida dentro de la misma provin-

cia donde la plaga hubiese aparecido, y esté reconocida su existencia legal, y que declare hallarse de acuerdo con el tratamiento propuesto para combatir el insecto o criptógama origen del mal.

Art. 11. Si de la labor realizada por la Asociación encargada de este servicio se hubieran deducido éxitos satisfactorios, y la rapidez y exactitud en la ejecución del mismo demostraran su celo por el bien público, o del plan formulado, y de la respetabilidad de la entidad agraria solicitante se dedujera la acertada realización de la campaña de extinción, el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería podrá subvencionar sus trabajos con una cantidad variable del importe del presupuesto que previamente se forme, cuyo presupuesto deberá aprobar siempre el dicho Consejo, determinándose por el mismo organismo la forma, cuantía y momento de contribuir por su parte, con auxilios pecuniarios, a los trabajos de la Asociación, si así lo acordara como conveniente.

Art. 12. Terminados los trabajos, el Ingeniero encargado de la dirección de los mismos formulará una nota, comprensiva de los medios puestos en práctica por la Corporación para desarrollar el plan de defensa, resultado obtenido, tiempo empleado en la extinción de los focos y cuantos datos fuesen precisos para juzgar con acierto de la gestión realizada. La nota referida se someterá a la aprobación del Consejo provincial, que, una vez aprobada, remitirá al Ministerio de Fomento para su conocimiento.

Art. 13. Los Ingenieros de las Secciones agronómicas podrán dirigirse en consulta, cuando lo creyeren necesario, a la Estación patológica del Instituto Agrícola de Alfonso XII en todos los casos relacionados con las dudas que se les presenten al hacer la clasificación de la plaga o al designar los procedimientos más eficaces para combatirla.

Art. 14. Cada Consejo provincial de Agricultura y Ganadería difundirá la enseñanza de los medios más convenientes para extinguir las plagas del campo que al efecto dicten los Ingenieros agrónomos sobre cada una y también los medios preventivos, publicando cuantos folletos y hojas divulgadoras sean precisas, dando a la vez conferencias con carácter ambulante, que tiendan a vulgarizar el conocimiento de la plaga y sus remedios.

Cuando las noticias relativas a la existencia de la plaga puedan interesar a varias provincias de una región, los Ingenieros remitirán los datos necesarios al Jefe regional para su inserción en el *Boletín Agrícola* mensual.

Asimismo podrán relacionarse, por medio de sus Presidentes, los Consejos de las diferentes provincias del Reino que tengan cultivos similares, a fin de instruirse recíprocamente y comunicarse los procedimientos que unos u otros tengan en estudio o en aplicación.

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio publicará y realizará análogos trabajos de divulgación y enseñanza respecto de toda plaga cuyos medios de extinción convenga interesar a diversas provincias del Reino.

Art. 15. El Consejo Superior de la Producción y del Comercio Nacional y la Junta Consultiva Agronómica serán los Cuerpos consultivos encargados de informar al Ministerio de Fomento en la materia cuando este Departamento lo creyese oportuno, quedando

también facultadas dichas Corporaciones para proponer a la Superioridad las medidas que juzguen necesarias para la extinción de las plagas del campo en los casos generales.

Art. 16. Los Jefes provinciales de Fomento tienen la obligación ineludible de dar conocimiento al Ministerio de Fomento de la presentación de cualquier plaga, y, mensualmente, de la forma en que se realizan las operaciones de extinción o prevención, a los efectos de superior dirección e inspección asignadas a los órganos centrales por el Real decreto orgánico de Servicios de Agricultura y Ganadería de 25 de octubre de 1907.

Art. 17. Para atender a los gastos de prevención o de extinción y de la subvenciones que puedan acordarse, así como para los de divulgación, publicación y material, cada Consejo provincial de Agricultura y Ganadería queda autorizado para crear un fondo, que podrá llegar al 0,50 por 100 de la riqueza líquida imponible de cada término municipal, y sin perjuicio del que pueda haber para las plagas de langosta y filoxera; dicho fondo se recaudará por las respectivas Juntas locales de defensa, y se entregará al Consejo provincial para su custodia e inversión, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, librándose las cantidades por el Jefe provincial de Fomento.

En caso de negativa al pago, el Consejo provincial, a propuesta de la Junta local, acordará la exacción por la vía de apremio.

Las indemnizaciones del personal técnico se sufragarán siempre con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento, el cual consignará anualmente en aquél cantidad especial para trabajos y estudios generales sobre plagas, a la vez que para auxilios que, a su juicio, convenga en algún caso conceder por la intensidad de la enfermedad.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA FILOXERA

Art. 18. Se declara calamidad pública la plaga que invade los viñedos de diversas provincias de España, conocida con el nombre de *phyloxera vastatrix*. Se considerarán de utilidad pública cuantas medidas se adopten para evitar, contener o combatir la invasión, difusión y propagación de la plaga y para repoblar los viñedos destruidos.

Art. 19. Para el cumplimiento de cuantos servicios dispone este capítulo, intervendrán, como Comisión central de Defensa contra la filoxera, la Sección de Agricultura del Consejo Superior de la Producción y del Comercio nacional y la Junta Consultiva Agronómica, esta última para cuantos asuntos técnicos relativos a esta plaga tramite el Ministerio de Fomento; como Comisión provincial, el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, creado por Real decreto de 17 de mayo de 1907, y como Juntas locales de Defensa, las que se crean por el art. 2.º de la presente Ley.

Art. 20. Para la organización de los trabajos de defensa contra la invasión de esta plaga, se divide la Península e islas adyacentes en provincias filoxeradas y no filoxeradas.

La declaración de provincia filoxerada se hará por el Ministro de Fomento, previo informe del Ingeniero agrónomo de la Sección y del Consejo provincial respectivo, dando conocimiento al Ministerio de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio internacional filoxérico de Berna de 3 de noviembre de 1881, al que se adhirió España en 23 de enero de 1891.

Art. 21. Las provincias filoxeradas no podrán en ningún caso exportar a las no filoxeradas, ni dentro de cada provincia de una zona filoxerada a otra que no lo esté, los siguientes productos: los sarmientos, barbados, púas y demás residuos de la vid, como troncos, raíces, hojas, rodrigones usados y cuanto haya servido para el cultivo de este arbusto, aunque se exporte como leña o combustible.

La circulación de estos productos a través de los pueblos de provincia no filoxerada sólo será permitida si el transporte se hace en cajas de madera bien cerradas, debiendo además llevar un precinto de la Casa exportadora y otro de la estación de embarque, y sin que en ningún caso se detenga la expedición en puntos intermedios. En la parte exterior de las cajas se inscribirá la clase del envío.

Art. 22. La exportación de la uva para el consumo, uva pisada, orujos, bulbos, cebollas y raíces procedentes de provincias filoxeradas, podrá hacerse siempre que para el envío a las no filoxeradas se transporten: la uva embalada, en cajas o barriles que no contengan hojas; el vino y la uva pisada, en toneles bien cerrados o en vagones-estancos que se empleen para tal objeto; el orujo, en cajas, pipas cerradas o en sacos perfectamente cosidos y embreados por su parte exterior; los bulbos, cebollas, tubérculos y raíces, en envases cerrados, debiendo haber sido lavados previamente para despojarlos de la tierra o fragmentos extraños que les acompañen.

Art. 23. La exportación de árboles, arbustos y toda clase de plantas vivas que no sean la vid, procedentes de provincias filoxeradas, sólo podrá hacerse con destino a las no filoxeradas cuando procedan de establecimientos agrícolas que, por reunir las condiciones del art. 3.º del Convenio internacional de Berna, estén incluidos en la lista que anualmente deberá formarse para el cumplimiento del art. 9.º del referido Convenio, debiendo acompañarse a la expedición una declaración firmada, en la que el remitente exprese:

- 1.º El punto de destino, nombre y residencia del destinatario;
- 2.º Que en el envío no van cepas, y que procede de su establecimiento, y
- 3.º Si el envío contiene o no plantas con raíces y tierras adheridas a las mismas.

Esta declaración deberá estar visada por la Junta local de defensa del pueblo de procedencia.

Art. 24. Cualquiera que sea su procedencia, podrán hacerse los envíos de todos los productos antes enumerados, dentro de las provincias filoxeradas, con tal de que no se detengan en provincia no filoxerada, sin necesidad de cumplir ninguno de los requisitos expresados, a menos que se destinen a términos municipales aun indomnados, dentro de provincia filoxerada. Las provincias no filoxeradas podrán exportar libremente todos los productos que cultiven.

Art. 25. Los dueños de establecimientos de horticultura y jardinería que, pública o privadamente, se dediquen a la venta de plantas vivas, deberán, en el mes de mayo de cada año, solicitar del Jefe provincial de Fomento una visita de inspección por los Ingenieros agrónomos de las Secciones de los referidos establecimientos, para que, en el caso de hallarse comprendidos dentro de lo que dispone el art. 3.º del Convenio internacional de Berna, se les incluya en la lista que, según el apartado 6.º del art. 9.º, ha de formarse anualmente en el mes de diciembre por el Ministerio de Fomento.

Art. 26. Las plantaciones de vides americanas se podrán hacer en términos municipales filoxerados sin autorización alguna previa. En términos municipales indemnes se podrán hacer plantaciones e injertos de vides americanas, siempre que lo aprueben el Consejo provincial y la Junta local, y previos los requisitos de desinfección que por aquél se señalen.

Art. 27. Queda terminantemente prohibido la introducción y transporte en provincias no filoxeradas del insecto en estado vivo, sus huevos, larvas y ninfas, como no sea en frascos o tubos de cristal herméticamente cerrados y lacrados.

También queda prohibido el paso por las viñas de piaras de ganado, así como el de los obreros que hubiesen trabajado en viñedos filoxerados.

Art. 28. La introducción, en la Península e islas adyacentes, de sarmientos y barbados de vid americana, procedentes del Extranjero, podrá tener lugar por todas las Aduanas.

Los envíos destinados a provincia filoxerada podrán ser introducidos libremente, sin autorización ni reconocimiento previo. Si debiera el envío atravesar por provincia no filoxerada, deberá importarse en las condiciones señaladas en el art. 21, sin detenerse en punto alguno del tránsito dentro de la provincia no filoxerada, no siendo necesarios el reconocimiento ni la autorización de Autoridad alguna, a menos que surjan dudas, en cuyo caso se solicitará por la Aduana respectiva del Jefe provincial de Fomento en donde aquella esté sita.

Si fuera el envío a provincia no filoxerada, en virtud de lo dispuesto en el art. 26, deberá exhibirse en la Aduana autorización del Consejo provincial de Agricultura respectivo.

Art. 29. En ningún caso podrán introducirse en la Península e islas adyacentes las viñas arrancadas y los sarmientos secos; y respecto a las uvas, orujo, bulbos, cebollas, tubérculos o raíces, si la procedencia es de región filoxerada, sólo estará permitida su entrada en las condiciones de embalaje que determina el art. 22 de esta Ley.

Art. 30. Los árboles, arbustos de todas clases y plantas que no sean la vid, podrán entrar libremente en la Península e islas adyacentes, sea cualquiera su procedencia, si no han de atravesar o no van destinados a provincias no filoxeradas.

Si han de atravesarlas, han de ir embalados en cajas cerradas con los precintos dichos, o ser enviados por establecimientos incluidos en la lista que, según el art. 9.º, párrafo 6.º, del Convenio de Berna, han de formar anualmente los Estados contratantes.

Si han de quedar en provincias no filoxeradas, han de ser enviados por los establecimientos dichos o ir acompañados de la de-

claración y certificado que expresa el art. 3.º del citado Convenio.

Art. 31. Cuando los productos que expresa el artículo anterior sean de países no adheridos al Convenio de Berna y vayan consignados a provincias no filoxeradas, sólo será permitida su entrada si proceden de país indemne, lo que se justificará mediante certificaciones, expedidas por el Cónsul de España en el punto respectivo, haciendo constar que no existe en aquél la filoxera, y con todos los demás documentos necesarios para acreditar, en el caso de que las plantas, árboles o arbustos hayan pasado por países donde exista la invasión, que no han sido deshechos los bultos del embalaje que los contiene.

Art. 32. Las semillas, plantas desecadas y convenientemente preparadas para herbarios; las flores cortadas y demás productos distintos de los de la vid, enumerados en el art. 22, podrán entrar en España sin más limitaciones que las que sean resultado de las medidas adoptadas para evitar la propagación de otras enfermedades distintas de la filoxera, salvo lo dispuesto en el art. 30.

Art. 33. La circulación de los productos procedentes del Extranjero que se enumeran en los artículos anteriores se verificará en la Península con arreglo a lo que, respecto al tránsito e importación en los diversos pueblos, determina esta Ley para provincias filoxeradas y no filoxeradas.

Art. 34. Para atender a los gastos que origine la defensa y reconstitución de los viñedos, instalación de viveros, adquisición de vides resistentes, material agrícola y demás necesidades del servicio antifiloxérico, las Diputaciones provinciales incluirán en sus presupuestos de ingresos, y con carácter obligatorio, la cantidad de 1 peseta por cada hectárea de viñedo que existiese en sus respectivas provincias. Con este impuesto, que se recaudará anualmente, se formará un fondo provincial, que, depositado en las respectivas Sucursales del Banco de España, y a disposición del Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, servirá para atender a los expresados objetos, así como para los de estudio y divulgación relacionados con esta materia y que vayan instruyendo al viticultor en los problemas y soluciones anexos a la misma.

El impuesto referido sólo se aplicará a los viñedos constituidos con variedades de vid europea no resistentes a la acción de la plaga.

Art. 35. En las provincias en donde, a la promulgación de esta Ley, se halle establecido por las Diputaciones provinciales el servicio antifiloxérico y de repoblación a sus expensas, con independencia del fondo señalado en el art. 12 de la Ley de 1885 y en condiciones que respondan debidamente a su objeto, los Consejos de Agricultura y Ganadería quedan relevados de atender a dicho servicio, así como las Diputaciones lo quedan de recaudar el impuesto señalado en el art. 34 de la presente Ley. A este efecto, dichos Consejos pondrán en conocimiento del Ministerio de Fomento el estado de dichos servicios para la declaración por el mismo de la improcedencia de la duplicidad de funciones. El Consejo de Agricultura y Ganadería estará en todo caso obligado a cumplir las demás atribuciones y deberes que por esta Ley se le imponen en orden a la vigilancia y defensa, facilitando la labor de la Diputación provincial con sus medios de acción educadora cerca de los agricultores.

Periódicamente dará cuenta al Ministerio de Fomento de la obra que por aquélla se realice para el conocimiento general de todos los trabajos de progreso agrícola que a dicho Centro superior incumbe.

Art. 36. Todos los viveros de vides americanas, bien sean sostenidos por el Estado, las Diputaciones provinciales o los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería, suministrarán a los viticultores de los términos municipales invadidos por el insecto, con intervención de las respectivas Juntas locales, los sarmientos o barbados que aquéllos soliciten, a un precio módico, teniendo en cuenta siempre la producción obtenida para la mayor equidad en el reparto.

Al hacer el pedido, deberá justificar el interesado su calidad de viticultor; haber satisfecho, en su caso, el impuesto que determina el art. 34, y, al propio tiempo, designar la finca donde tratase de hacer la plantación.

El importe de las ventas hechas de los viveros provinciales se ingresará en el fondo provincial para aumentar el mismo.

Las Juntas municipales de Defensa, a las que previamente se comunicarán las concesiones de sarmientos y barbados que se hagan con arreglo a lo prevenido en este artículo, cuidarán de que no se dé a las mismas otra aplicación que aquella para que fuesen concedidas, y no consentirán de ningún modo su reventa.

Art. 37. Las Cámaras y Sindicatos agrícolas, Comunidades de labradores y cualesquiera otras Asociaciones de esta índole que tengan establecido o establezcan en las provincias donde estuviesen constituidas, y en los términos municipales de las mismas atacados por el insecto, viveros de vides americanas, de acuerdo y en relación con el Consejo provincial, serán estimuladas por el mismo, facilitándole los auxilios conducentes a dicho objeto, y obtendrán preferentemente, tanto del Estado como de las Diputaciones provinciales y Consejos, en su caso, sarmientos y barbados para el reparto entre los socios, lo mismo que cuanto conduzca al fin de la repoblación vitícola.

En todos y cada uno de estos casos, la Sociedad justificará anualmente el uso hecho del auxilio que se le hubiere concedido.

Art. 38. En las Granjas-Escuelas prácticas de Agricultura regionales, y Estaciones ampelográficas y enológicas, se estudiarán con detenimiento todos los problemas derivados de la repoblación de vides americanas, consagrando también la necesaria atención a los medios de evitar, contener o extinguir toda clase de plagas que atacase a la producción vitícola.

El resultado de los trabajos se formulará en una Memoria, que anualmente aprobará el Consejo de vigilancia del establecimiento, remitiéndola al Ministerio para su conocimiento y divulgación.

Dichos establecimientos del Estado resolverán gratuitamente cuantas consultas se les haga relativas a los problemas de prevención, extinción y repoblación, atendiendo solicitadamente a las demandas de guía y consejo que por los provinciales de agricultura o por las entidades agrarias se les dirijan en orden a las funciones que por esta Ley se les encomiendan.

Asimismo las proporcionarán, en la medida que permitan sus existencias, los sarmientos y barbados que convenga ensayar o reproducir en las respectivas provincias.

Art. 39. En las provincias donde no estuviera declarada oficialmente la filoxera, y en los términos municipales todavía indemnes de las filoxeradas, se practicarán detenidos reconocimientos, para averiguar el estado de los viñedos, por el personal agronómico. A este fin, los Jefes provinciales de Fomento dictarán las disposiciones necesarias.

Art. 40. Desde la promulgación de esta Ley, los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería se harán cargo de todas las cantidades recaudadas con arreglo a la de 1885, y depositadas en la actualidad a disposición del Ministerio de Fomento. Asimismo se encargarán de los viveros que haya establecidos y de todos los demás trabajos que vinieran realizándose con cargo a dichas cantidades, a fin de proseguirlos e impulsarlos, en virtud de lo dispuesto en esta Ley, y aplicar, desde luego, a ellos los fondos hasta hoy recaudados en cada provincia que no hayan tenido aplicación.

Art. 41. El Ministerio de Fomento facilitará a los Consejos provinciales los datos que posea y puedan ayudarles a llevar a cabo lo dispuesto en el artículo anterior. Asimismo dictará las disposiciones que sean precisas para ponerles en posesión de cuanto en él se determina.

Art. 42. Las Compañías de ferrocarriles y Agencias de transporte no podrán admitir, para su circulación, las mercancías prohibidas por esta Ley, ni para su conducción desde la frontera y Aduanas a puntos del interior de España, ni de provincia infestada por el insecto a otra que no lo estuviera.

Las contravenciones serán penadas con una multa de 100 a 500 pesetas, que hará efectiva el Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo provincial de Agricultura y Ganadería respectivo; en este caso procederá la desinfección del vagón.

Art. 43. En igual multa incurrirán los establecimientos de horticultura y jardinería que, ejerciendo el comercio de plantas vivas, no tuvieran en cuenta las disposiciones prohibitivas dictadas para el transporte de mercancías, así como cualquier otro remitente que no se atuviera a lo preceptuado.

Cuando se pruebe que la existencia de la filoxera en una provincia, libre hasta hoy de la acción del insecto, fuese debida a la importación ilegal de los mencionados productos, el introductor incurrirá además en las responsabilidades que, con arreglo a las Leyes, puedan exigirle los perjudicados.

Art. 44. La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio dispondrá que los Ingenieros de las Secciones agronómicas y personal de Ayudantes afectos a dicho Servicio practiquen reconocimientos en las provincias atacadas por la filoxera, con objeto de conocer la extensión del mal. Terminados los trabajos de campo, se procederá a formar el Mapa filoxérico de la provincia, el cual será remitido a la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, para la formación del Mapa general de la invasión filoxérica de España, con arreglo al párrafo 5.º del art. 9.º del Convenio internacional de Berna.

Art. 45. Las plantaciones nuevas que se hagan con variedades e híbridos de vides americanas, resistentes a la filoxera, quedan exentas del pago de la contribución territorial durante los seis años siguientes al de su plantación.

Disfrutarán de igual beneficio durante diez años, contados de igual manera, las plantaciones nuevas de olivos, almendros, algarrobos, avellanos, castaños, encinas, manzanos y demás árboles o arbustos frutales o forestales, siempre que en los terrenos ocupados por esas plantaciones no exista ni se plante vid, porque en ese caso sólo disfrutarán de la exención del párrafo anterior.

Igualmente gozarán dicha exención, durante tres años, las plantaciones nuevas, verificadas anual y consecutivamente en dicho tiempo, de cereales, plantas leguminosas y forrajeras, textiles, bulbos y tubérculos, siendo condición precisa la alternativa, no interrumpida, de tales cultivos, de suerte que no queden barbechos de uno a otro año agrícola.

Quedarán asimismo exentas del pago de la contribución, durante un plazo de seis años, las nuevas construcciones de cuadras, rediles, corrales, depósitos y silos de forrajes y granos, almacenes, cobertizos para maquinaria y enseres, casas y habitaciones para el personal agrícola de las fincas urbanas que se levanten en el anterior plazo de seis años sobre los terrenos afectos a los cultivos expresados en el anterior párrafo.

En todos los casos será condición precisa que las nuevas plantaciones ocupen terrenos dedicados hasta entonces al cultivo de la vid.

Para disfrutar de este beneficio bastará dirigir una comunicación al Delegado de Hacienda de la provincia, acompañada de un certificado de la Junta Central del Catastro del pueblo y de la Junta de Defensa de plagas local, que acredite la existencia de la nueva plantación y la superficie que comprende. A los treinta días de presentados estos documentos se considerará concedida la exención del pago de contribución de las fincas a que se refiera, si el Delegado de Hacienda, por consecuencia de los informes y reconocimientos que estime convenientes, no encontrara motivos fundados para oponerse a ella.

Art. 46. Los viñedos destruidos por la filoxera serán baja en la riqueza imponible de los respectivos pueblos, y, a este efecto, el Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones convenientes todos los años, dentro del mes anterior a aquel en que deban formarse los amillaramientos y cupos de los pueblos.

Art. 47. Queda autorizado el Gobierno para devolver a los antiguos propietarios los viñedos de que se hubiere incautado el Estado, por faltas de pago de contribución, cuando esta falta haya tenido por causa la destrucción de los mismos por la filoxera, y siempre que éstos no hayan pasado aún a poder de terceras personas.

Para disfrutar de este beneficio será condición precisa cualquiera de las siguientes:

1.^a Que los viñedos de que se trata sean replantados por sus dueños con vides americanas, resistentes al insecto, en el término de dos años.

2.^a Que los terrenos ocupados antes por los viñedos sean objeto de nueva plantación de olivos, almendros, algarrobos, avellanos, castaños, encinas, manzanos y demás árboles o arbustos frutales o forestales, en el término de cinco años.

3.^a Que los expresados terrenos sean dedicados, durante tres años consecutivos, al cultivo de cereales, plantas leguminosas y fo-

rrajerías, textiles, bulbos y tubérculos, sin barbecho de uno a otro año agrícola.

Los plazos empezarán a contarse desde el día en que sean devueltas las fincas a sus dueños.

Si de las visitas de inspección giradas por los Ingenieros afectos al Servicio agronómico resultase que en los respectivos plazos fijados anteriormente no se habían efectuado las nuevas plantaciones, incurrirán los dueños en la pérdida de las fincas y en el abono de las sumas condonadas.

Art. 48. Cuando conviniese, para retrasar la difusión del insecto, extinguir focos filoxéricos, la destrucción de las cepas que los constituyan se hará sin que proceda indemnización alguna al propietario del viñedo, siempre que no haya hecho éste la correspondiente denuncia en el momento en que algún signo visible al exterior demuestre la existencia del insecto en las raíces de la planta.

La indemnización será acordada por el Consejo provincial, y con cargo al impuesto establecido por el art. 34 de esta Ley.

Art. 49. La indemnización expresada en el artículo anterior no será concedida en ningún caso cuando se trate de propietarios que, contraviniendo las disposiciones de la presente Ley, hayan introducido en sus terrenos plantas o productos prohibidos.

En el caso de que la indemnización procediese por el estado de producción del viñedo filoxerado que se trate de destruir, el Ingeniero de la Sección visitará el foco, y emitirá su dictamen acerca de la conveniencia de extinguirlo y de los perjuicios que se irrogasen al propietario, teniendo en cuenta, además de las consideraciones que juzgue oportunas, el número de cepas que hubiese de someter al tratamiento y su vida agrícola probable, dada la intensidad con que estuvieran atacadas por la plaga, resolviendo en todos los casos el Consejo provincial.

Art. 50. Todas las infracciones cometidas, en lo que se refiere a importación de productos prohibidos por esta Ley, en las provincias no filoxeradas, serán castigadas con multas de 100 a 500 pesetas, que harán efectivas los Jefes provinciales de Fomento. Cuando se pruebe que la existencia de la filoxera en un punto es debida a esa importación ilegal, el introductor incurrirá además en las responsabilidades que, con arreglo a las Leyes, puedan exigirse los perjudicados.

Art. 51. Las expediciones de productos que, debiendo ir acompañadas, para su circulación por las provincias que atraviesen, de certificados de procedencia, no los llevasen, serán detenidas y quemadas, imponiéndose al dueño de la expedición, y al que las transporte, una multa de 100 a 500 pesetas.

Serán detenidas también, incurriendo el dueño y quien las transporte en las mismas multas, las expediciones que no lleven los envases reglamentarios.

Art. 52. Cuando en las Aduanas y fronteras se presentasen cualesquiera de los efectos cuya circulación está prohibida por la presente Ley, o cuando carezcan de los envases reglamentarios, serán quemados o devueltos al punto de partida, según prefiera el infractor o quien en aquel acto le represente, a su costa. Si el personal del Servicio agronómico correspondiente descubriese la existencia de la filoxera o indicios de que pudieran contenerla, serán quema-

dos los envíos, juntamente con los embalajes, librándose, en tal caso, testimonio al punto de su origen. Serán quemados igualmente los embalajes y camas de ganados que hubiesen sido formados con restos y despojos de cepas.

Cuando los efectos a que se refieren los artículos de esta Ley fueran descubiertos en las Aduanas o fronteras, sin que por los dueños, o quien los represente, se haya hecho la declaración de los mismos, se impondrá al contraventor, por el Jefe provincial de Fomento, además de la multa que establecen las Ordenanzas de Aduanas, otra de 100 a 1.000 pesetas, según la gravedad del caso. Si, verificada la introducción fraudulenta de los efectos mencionados, fueran aprehendidos en el interior de la Península, se aplicará al caso el Real decreto relativo a los delitos de contrabando, con la penalidad pecuniaria o personal correspondiente, calculando la defraudación por lo menos en el máximo de la multa. Los aprehensores o descubridores de los efectos serán premiados con la mitad del importe de las multas que se impongan al contraventor.

Art. 53. Los Ingenieros agrónomos de las Secciones y los Ayudantes del Servicio cuidarán si en las estaciones de ferrocarriles, Agencias de transportes y puntos de tránsito comprendidos dentro de sus provincias se da exacto cumplimiento a lo preceptuado por esta Ley, comunicando a los Consejos provinciales las infracciones que observen y proponiendo la penalidad que estimen aplicable para su imposición por el Jefe de Fomento, como Autoridad superior de la provincia en estos asuntos.

Art. 54. Cada Consejo provincial redactará anualmente una Memoria en que se consignen los trabajos realizados en defensa contra la plaga de filoxera y los de repoblación de vid u otros cultivos, Memoria que remitirán los dichos Consejos al Ministerio de Fomento.

Mensualmente darán también conocimiento al Ministerio de cualquier alteración que ocurra en la provincia con respecto a esta plaga.

Art. 55. La inspección superior de todo el Servicio a que se refiere el capítulo 2.º de esta Ley se ejercerá por la Comisión Central de Defensa que se menciona en el art. 19, compuesta de la Sección de Agricultura del Consejo Superior de la Producción y del Comercio nacional y de la Junta Consultiva Agronómica.

Art. 56. El Ministerio de Fomento queda encargado de la ejecución de las medidas contenidas en el capítulo 2.º de la presente Ley, cuidando del exacto cumplimiento, por parte de las entidades y funcionarios dependientes de él, de cuantas funciones se les confieren y de los deberes que se les imponen.

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE LA LANGOSTA

Art. 57. La plaga de langosta, por la difusión que puede alcanzar y por los perjuicios que ocasiona en todos los cultivos, debe considerarse como calamidad pública, y cuantas medidas se adop-

ten, tanto para extinguirla como para contener su desarrollo, revestirán el carácter de utilidad pública.

Art. 58. La Junta local de Defensa de plagas, creada por el artículo 2.º de esta Ley, queda obligada a girar, por sí o por las personas que designe, una visita a todo el término municipal y fincas de que se componga, durante los meses de junio y julio de cada año, con el fin de observar si existen bandos de langosta que hayan germinado en el mismo o procedan de otras localidades y puedan hacer la aovación, para comunicárselo a los terratenientes de dicho término, dando conocimiento inmediato al Jefe provincial de Fomento, quien, de acuerdo con el Ingeniero agrónomo, dispondrá que éste, o algún Ayudante a sus órdenes, salga a reconocer el terreno e informe de la importancia de la plaga.

Igualmente dará conocimiento la Junta local de la aparición, en el término municipal, de la langosta en cualquier estado, en la época que sea.

La negligencia o abandono de la Junta local en el cumplimiento de los deberes que le impone este artículo será castigada por el Consejo de Agricultura y Ganadería de la provincia con multa de 100 a 500 pesetas.

Art. 59. Comprobada la existencia de la plaga, dará cuenta de su aparición el Jefe de Fomento a los de las provincias limítrofes al término municipal donde la aovación o el insecto se haya manifestado, con el fin de que tomen las oportunas medidas.

Art. 60. El Jefe de Fomento, auxiliado de las Juntas locales de Defensa y del personal agronómico, exigirá a los propietarios, o colonos en su caso, y dentro de la primera quincena de agosto, una relación de las hectáreas que en sus propiedades estén infectadas de langosta, y, en la segunda quincena de dicho mes, las Juntas establecerán el debido servicio de vigilancia en todos los campos invadidos para observar los sitios en que la langosta verifique la aovación, procediendo inmediatamente a su acotamiento.

Las Juntas de Defensa pasarán nota a los propietarios de terrenos infectados de canuto, o a las personas que los representen, en que se exprese la extensión acotada en sus fincas, de cuya entrega dará el correspondiente recibo.

Si hubiere desavenencia con respecto a la extensión de la superficie acotada en sus fincas, su clasificación o linderos, con arreglo a lo efectuado por la Junta local, será resuelta por el Consejo provincial, sin ulterior recurso.

Los propietarios o colonos que falten a los deberes que se les impone en el párrafo 1.º de este artículo incurrirán en una multa de 50 a 500 pesetas, que les será impuesta por el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería.

Art. 61. El personal agronómico de cada provincia comprobará, antes de publicarse la relación de los terrenos acotados, si efectivamente existe el germen de langosta en los mismos, y a la vez denunciará cuantos se encuentren invadidos al Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, debiendo éste dar conocimiento, en todo caso, al Ministerio de Fomento.

Art. 62. Los Jefes de Fomento en las provincias invadidas por la plaga comunicarán a la Autoridad competente su existencia para

que prohíba la caza de aves insectívoras, aun cuando no sea la época de veda que determina la Ley.

Art. 63. Hechos los acotamientos, y notificada en forma la resolución de que habla el art. 65 al interesado o su representante, manifestará éste a la Junta local de Defensa, en el término de diez días, si opta por proceder por su cuenta a la extinción del insecto, en cuyo caso propondrá a la Junta, sin dilación, los procedimientos que piense utilizar; y, aprobados que sean por ésta, los empleará en los períodos a propósito, según el estado del insecto.

Cuando no se presten a extinguirlo por sí, no podrán oponerse, bajo ningún pretexto, a que la Junta proceda, dentro de su finca, a usar de los medios que se detallan en los artículos siguientes.

El propietario que no se preste a extinguir por sí y de su cuenta, en su finca, el insecto, a pesar de contar con medios para ello, será castigado con una multa de 10 a 50 pesetas por hectárea de terreno infestado, que le será impuesta por el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, previo informe de la Junta local.

Si el propietario se presta a extinguirlo por sí, y de su cuenta, por los procedimientos aprobados por la Junta, ésta vigilará los trabajos; y si entiende que no ha verificado la extinción en la forma debida, suplirá las omisiones que note, previa consulta urgente al Consejo provincial, el cual podrá imponer al propietario la multa a que se refiere el párrafo anterior.

La Junta podrá ayudar y premiar, con una cantidad que oscilará entre 5 y 50 pesetas, al propietario que se haya prestado a extinguir por sí, y por su cuenta, el insecto por los procedimientos aprobados por dicha Junta.

Art. 64. Si el insecto estuviera en estado de canuto, se emplearán, para su extinción por las Juntas locales, en el caso en que el propietario no se preste a hacerlo por sí, los siguientes procedimientos:

- 1.º Si el terreno fuera susceptible de ser arado o escarificado, se apelará siempre a este medio;
- 2.º Si, habiendo sido ya labrado, no se hubiera conseguido la extinción completa, o no fuere susceptible de ser arado o escarificado, la Junta acordará el uso del azadón o la introducción del ganado de cerda;
- 3.º En los terrenos pedregosos o en los que, por su gran pendiente, no pudieran emplearse los procedimientos anteriores, la Junta municipal ordenará la recogida del canuto.

Estos trabajos habrán necesariamente de comenzar antes del día 1.º de diciembre, y se terminarán, sin excusa alguna, el día último de enero siguiente.

En el caso de que la recogida del canuto se haga a mano, el Consejo provincial fijará el precio a que debe pagarse. El canuto recogido se conservará cuidadosamente, bajo la responsabilidad de la respectiva Junta, hasta tanto que el Consejo resuelva su destrucción y designe las personas que hayan de intervenirla.

Art. 65. Una vez terminada la campaña de invierno para la extinción del canuto, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, la Junta local girará una visita para comprobar si todavía subsisten en el término municipal gérmenes de langosta que puedan avivar durante la primavera.

En caso afirmativo, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de Fomento, a fin de que éste dé cuenta a los Jefes de las provincias colindantes y lo comuniquen al Ministro del ramo.

La Junta, además, propondrá al Consejo provincial, para cada finca, el empleo de trochas de cinc, apertura de zanjas, clase de insecticida que considere más adecuado, cantidad que estime precisa y cuanto entienda que es necesario para destruir el mosquito en la campaña de primavera.

Aprobado por el Consejo el plan propuesto para cada finca por la Junta local, ésta lo notificará al propietario o a su representante, para que, en el término de diez días, manifieste si opta por llevar a cabo por sí, y de su cuenta, los trabajos de extinción aprobados por el Consejo para la campaña de primavera. Si se niega el propietario, a pesar de contar con medios para ello, será castigado con una multa de 10 a 50 pesetas por hectárea de terreno infestado, que le será impuesta por el Consejo, previo informe de la Junta local. Si el propietario se obliga a realizar por sí, y de su cuenta, los trabajos de la campaña de primavera aprobados por el Consejo, la Junta local vigilará dichos trabajos; y si entiende que no se han realizado en forma debida, suplirá, previa consulta urgente al Consejo provincial, las omisiones o deficiencias en que hubiera incurrido el propietario, el cual podrá ser castigado por el Consejo con la multa a que se refiere el párrafo anterior.

Si el propietario no se presta a realizar por sí, y de su cuenta, los trabajos de la campaña de primavera, no podrá oponerse, bajo ningún pretexto, a que la Junta proceda, dentro de su finca, a usar los medios aprobados por el Consejo provincial.

Éste pondrá a disposición de la Junta, antes del 15 de abril, cuando sea dicha Junta y no el dueño la que realice la campaña de primavera, los aparatos convenientes para la aplicación del insecticida que se use, dando al personal agronómico las órdenes oportunas para dirigir las operaciones. Si el propietario realiza por sí la campaña de primavera, podrá reclamar del Consejo los aparatos que éste tenga para el empleo del insecticida que use y personal agronómico que dirija las operaciones.

La Junta podrá ayudar y premiar con una cantidad, que oscilará entre 5 y 50 pesetas, al propietario que se haya prestado a extinguir por sí, y por su cuenta, el insecto por los procedimientos aprobados por dicha Junta.

Art. 66. Cuando se trate de terrenos ribereños, no se practicarán operaciones de escarificación y roturación, haciéndose siempre a mano la recogida del canuto.

Art. 67. Para realizar las operaciones de arada, se convocará por secciones, y en los turnos que la Junta local establezca, a todos los dueños de animales de tiro, los que, yendo con sus yuntas al terreno que se les señale por la misma, y bajo la dirección del encargado de los trabajos, darán en rigurosa proporción de las yuntas obligadas, y como máximo, una hectárea de labor cruzada, o sea de dos rejas, por cuyo trabajo recibirán la indemnización que haya marcado el Consejo provincial, a propuesta de la Junta local. Si las yuntas así empleadas no fueran bastantes a labrar los terrenos que ocupara el insecto, las Juntas deberán emplear las que fuesen precisas y puedan pagarse con los fondos destinados a extinción.

Estos trabajos se realizarán dentro de la fecha marcada en el artículo 64.

Art. 68. Para los trabajos que no puedan realizarse con yuntas, según previene el artículo anterior, la Junta utilizará, en cualquiera de los estados del insecto, la prestación personal en la forma que la Ley Municipal establece para las obras públicas, pero haciéndola extensiva desde la edad de diez y seis a sesenta años, y limitándola a tres jornales, que no podrán ser exigidos sino uno en cada semana.

Art. 69. Cuando las Juntas locales tengan que hacer los trabajos, por no haberlos realizado los dueños de los terrenos, procederá al acotamiento, todo lo más exacto posible, dentro de la finca, del terreno infestado.

Art. 70. En el caso de que el dueño no se preste a realizar por sí, y de su cuenta, la campaña de invierno o de primavera, la Junta, en el momento oportuno para cada una de ellas, y una vez conocida la extensión y clase de terreno donde exista la langosta en el término municipal, formará para cada finca un presupuesto de los gastos que calcule necesarios para la campaña de que se trate. En dichos presupuestos incluirá, como medio que puede utilizar, la prestación personal y todos los gastos que puedan ocasionar los trabajos que se realicen, como pagos de yuntas, jornales de todas clases, costo de trochas, apertura de zanjias, uso de insecticida y cuantos se estimen precisos para la extinción. Dichos presupuestos serán aprobados o modificados por el Consejo provincial, el cual autorizará a las Juntas locales de cada término municipal para la recaudación de las cantidades a que asciendan entre los contribuyentes del término, con el fin de proceder por sí a la extinción.

Art. 71. Para cubrir los gastos que dicho presupuesto haya demostrado ser necesarios con destino a la extinción de la langosta, se gravará la riqueza imponible que conste señalada en el amillaramiento a cada contribuyente del término municipal, vecino o forastero, en rigurosa proporción con la cantidad necesaria; pero ésta no podrá exceder del 2 por 100 del líquido imponible de riqueza territorial, de cultivo y ganadería, ni del 2 por 100 en las cuotas de contribución industrial. Lo que al terminar la campaña no se haya invertido en gastos de extinción, de lo cobrado en cada término municipal, se devolverá a los propietarios e industriales que hayan contribuido a la derrama.

Se tendrá en cuenta que los contribuyentes que lo fueren por más de un concepto satisfarán, por cada uno de ellos, la cuota correspondiente, y que los propietarios que hagan los trabajos de extinción contribuirán asimismo en proporción igual a los demás.

La cobranza se hará en dos plazos, importante cada uno la mitad de la cantidad total.

Los productos de las multas que se hiciesen efectivas con arreglo al capítulo 3.º de esta Ley se destinarán a los gastos extraordinarios de oficina que al Consejo provincial ocasione la extinción de la langosta, y el sobrante, a la extinción del insecto, distribuido con equidad entre los términos municipales en que exista la plaga.

En el caso de resistencia al pago de las cuotas a que se refiere el párrafo 1.º de este artículo o de las multas impuestas por el Consejo, éste, previo informe de la Junta local, podrá acordar el apre-

mio, con relación a cada sujeto moroso, encomendando al Juez de primera instancia, y donde no lo hubiere, al municipal, el hacer efectiva la cantidad de que se trata por el procedimiento de apremio.

Si el Consejo careciera de fondos para atender a los gastos extraordinarios de oficina que ocasionase la extinción de la plaga, podrá acordar que cada Junta local de los términos invadidos haga efectiva con ese fin la cantidad que le señale dentro de los tipos que fija el párrafo 1.º del art. 71.

Art. 72. Los Jefes provinciales de Fomento cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que la recaudación se verifique en tiempo oportuno, y serán los Ordenadores de pagos de todos los que hayan de hacerse por los conceptos expresados.

Art. 73. En el caso de que la cantidad presupuesta no pudiera cubrirse con la recaudación autorizada por el art. 71, el Consejo provincial ordenará que en los pueblos limítrofes al invadido se graven con el 1 por 100 de la riqueza imponible territorial de cultivo y ganadería, y con un 1 por 100, las cuotas de contribución industrial, si ya en el referido pueblo no se hubiera alcanzado el máximo tributario que establece este artículo para los trabajos análogos que hayan de realizar en su propio terreno.

Si los pueblos limítrofes correspondiesen a distintas provincias, los Jefes de Fomento de ambas se pondrán de acuerdo para llevar a efecto lo preceptuado.

Art. 74. Si los recursos que se determinan por la presente Ley fueran insuficientes en alguna provincia para completar los gastos de la extinción, por la importancia con que se presentare la plaga, los Consejos provinciales acudirán a las Diputaciones provinciales para que les auxilien con la cantidad que tengan a bien acordar, y al Ministerio de Fomento, para que éste, en caso necesario, atienda a complementar lo necesario, para ultimar los trabajos por medio de un crédito extraordinario si fuera preciso, o con las consignaciones que puedan señalarse en el presupuesto de la Dirección de Agricultura. Será requisito indispensable para obtener alguna subvención o auxilio del Ministerio de Fomento que se acredite ser insuficiente el importe del presupuesto local de extinción para la adquisición de los elementos destructores que se juzguen necesarios. A este efecto, el Jefe provincial de Fomento, previo el informe técnico del Servicio agronómico, lo solicitará bajo su responsabilidad.

Art. 75. Se declaran propietarios, para los efectos de esta Ley y para las cargas que ella impone, previo el oportuno amillaramiento, el Estado y los Ayuntamientos por los terrenos baldíos, de Propios, veredas y demás sitios y lugares en que aparezca y deba extinguirse la langosta.

Art. 76. Cuando los terrenos acotados, excepción hecha de las veredas pertenecientes al Estado o a los Ayuntamientos, estén invadidos, serán escarificados o arados, previo reconocimiento o informe de los Ingenieros de Montes y Agrónomos.

Las cañas, cordeles y veredas que, previo reconocimiento facultativo, se hallen infestas por germen de langosta, se escarificarán con aparatos que proporcionará el Estado, y bajo la dirección del Servicio agronómico, debiendo las Juntas locales de los

términos municipales donde dichas vías pecuarias estén enclavadas facilitar el personal subalterno y las juntas necesarias para efectuar dicho trabajo, cuidando de que las labores sólo se ejecuten en los sitios donde exista la infección y de que no se profundicen más de lo necesario para destruir los gérmenes del insecto allí depositados.

Las autorizaciones concedidas al amparo de la Ley actual para sembrar todo o parte de las dehesas boyales, o de cualesquiera otros bienes pertenecientes a los pueblos, por estar infestados de langosta, serán respetadas en los términos que hubiesen sido concedidas.

Para lo futuro se regirán dichos bienes por los preceptos de esta Ley, y, mientras, el Consejo provincial podrá conceder autorización para que se siembren, en el caso de ser absolutamente preciso para la completa extinción de la plaga.

Art. 77. Las dehesas de propiedad particular que se aren, por causa de existir en ellas aovación de langosta, no variarán en nada su clasificación; si se sembrasen por su dueño, y durante tres años, seguirán contribuyendo como de pasto, siempre que hayan costeado de su cuenta las labores de extinción como preparatorias para la siembra. Los terrenos de propiedad particular que hayan sido arados o escarificados para la extinción de langosta solamente podrán ser aprovechados para la siembra por sus dueños, abonando los gastos de arada que la Junta haya hecho.

Art. 78. Las Empresas de ferrocarriles, por su condición especial, destruirán a su costa, y en el plazo que señale la Junta local, la plaga de langosta, en cualquiera de sus estados.

Si no lo hicieran, la dicha Junta local, de acuerdo con el Ingeniero que designe la Compañía, llevará a cabo los trabajos de extinción por cuenta de las citadas Empresas, y sin perjuicio de la responsabilidad que proceda, pero cuidando siempre de que no se causen desperfectos en la vía.

Art. 79. Incurrirán en la multa de 50 a 500 pesetas:

1.º Los propietarios, o colonos en su caso, que falten a la verdad en las relaciones de los terrenos invadidos en sus heredades.

2.º Los que pongan obstáculos, a la entrada en las mismas, a los Delegados de la Junta que hayan de atender a la extinción.

3.º Los que cometan cualquier falta que dificulte los trabajos encaminados a combatir la plaga.

4.º Los que incurran en extralimitaciones u omisiones no previstas en otro artículo, que tenga por objeto eludir los preceptos de la presente Ley.

5.º Los que, aun habiendo cumplido con todas las demás obligaciones que les impone esta Ley, no diesen oportuno aviso de la avivación del insecto; y

6.º Los propietarios y colonos que, habiéndose comprometido a realizar por su cuenta los trabajos de extinción, dejasen pasar los plazos señalados sin haberlo hecho.

Estas multas serán impuestas por el Consejo provincial de Agricultura y Ganadería, previo informe de las Juntas locales, las cuales le informarán cada diez días, bajo su más estrecha responsabilidad, de las faltas o abusos que se cometan. Contra la imposición de multas que el Consejo provincial acuerde, con arreglo a los pre-

ceptos de este capítulo, podrán los interesados ejercitar, en el término de diez días, contados desde la notificación, recurso de súplica ante el propio Consejo, que podrá revocar en todo o en parte la multa impuesta.

Art. 80. Los Consejos provinciales podrán imponer las multas correspondientes a los Alcaldes, Presidentes y Vocales de las Juntas locales que demuestren lenidad o abandono en el exacto cumplimiento de esta Ley.

Art. 81. En los pueblos en que no haya habido aovación de la langosta, y que se vean invadidos por la misma en su estado de saltón, se enviarán por el Ministerio de Fomento insecticidas o medios para su destrucción; pero se reintegrará el Estado del importe de los auxilios que haya prestado, a costa de aquellos otros pueblos de donde la plaga ha podido venir, por constar la existencia de la misma en estado de canuto en la época adecuada del año, en virtud de los reconocimientos que por el art. 61 realice el personal agrónomo de los cuales no conste taxativa y oficialmente que han cumplido con toda exactitud los preceptos de esta Ley, en orden a la campaña de otoño e invierno.

Para los efectos de este artículo se ordenará por el Ministerio de Fomento la formación de un presupuesto extraordinario por la Junta local de Defensa, en las mismas condiciones que establece el artículo 71, y haciéndose efectivo por la vía de apremio.

Art. 82. Cuando en los terrenos pertenecientes al Estado no se ejecuten las operaciones de extinción prevista por esta Ley dentro de los plazos señalados, lo harán las Juntas locales, incurriendo los funcionarios o dependientes del Departamento ministerial a que pertenezcan las fincas de que se trata en las penalidades establecidas en el art. 79.

Estas responsabilidades se harán, desde luego, efectivas por el Estado, ingresando las cantidades en el fondo de extinción, sin perjuicio de repetir después contra los funcionarios que resulten responsables.

Art. 83. Cuando el Ministerio de Fomento tenga crédito especial para extinción de la langosta no auxiliará a ninguna Junta local que no haya ejecutado todos los trabajos de la campaña de otoño e invierno, no facilitando en la de primavera ningún insecticida de los que adquiera.

A este fin, los Jefes provinciales de Fomento darán cuenta mensualmente de los trabajos que se verifiquen y qué pueblos los realizan y cuáles no, debiendo, en todo caso, dar conocimiento inmediatamente al Ministerio de la avivación de la plaga.

Art. 84. La distribución de todos los insecticidas y medios que se adquieran por el Ministerio de Fomento se hará por los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería, a cuyo fin, para que resulten menos costosos los transportes, mandarán la distribución citada al Ministerio, para que vayan directamente a los pueblos los elementos que se adquieran.

Art. 85. Los Ingenieros de todas las especialidades, los guardas de campo jurados, pastores, Guardia civil y cuantos pueden estar constantemente en el campo, quedan obligados a dar conocimiento a las Juntas locales y Consejos provinciales de cualquier presentación de la plaga de langosta en los terrenos que recorran.

Incurrirán en la multa de 1 a 25 pesetas los contraventores de esta disposición.

Art. 86. Los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería formularán, a la terminación de los trabajos de la campaña de primavera, una Memoria detallada de cuanto haya ocurrido en ambas campañas, para conocimiento del Ministerio, expresando con toda claridad los pueblos que cumplan con esta Ley y aquellos que no lo hagan, para ulteriores campañas.

Art. 87. La inspección superior de cuanto se relaciona con las medidas contenidas en este capítulo se ejercerá por la Sección de Agricultura del Consejo Superior de la Producción y de Comercio nacional y de la Junta Consultiva Agronómica.

El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecución de la misma.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Art. 88. Los remanentes que queden de los fondos recaudados en la forma que disponen los artículos 17 y 34 de la presente Ley se aplicarán, después de cubiertos todos los gastos que a las plagas se refieren, por los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería, a los demás fines asignados a los mismos por Real decreto de 17 de mayo último, siempre que consideren no ser precisos para su primordial objeto, por estar suficientemente atendido y previstas las nuevas aplicaciones que quepa hacer de los preceptos de la presente Ley, en orden a prevención o remedio de las plagas, y cuando entiendan que dichos remanentes pueden tener útil aplicación en cualquiera otra función de progreso agrícola y social de la provincia. La resolución es facultad privativa y autónoma del Consejo provincial.

Art. 89. Los Jefes de Fomento, Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería y las Juntas locales cuidarán de la estricta observancia de la Ley de 19 de septiembre de 1896, que dicta las medidas dirigidas a promover en los niños la compasión a los pájaros y que establece la acción pública para denunciar infracciones, así como la de Caza, de 16 de mayo de 1902, que clasifica las aves insectívoras y determina el procedimiento para perseguir su indebida instrucción, a la par que su comercio ilícito. Prohibirán además la destrucción de todos los animales útiles a la agricultura que, como los reptiles, en sus diferentes especies, son objeto de constante persecución, quedando a cargo de los referidos Jefes y Consejos provinciales la clasificación y enumeración de los que hayan de comprenderse en estas medidas de protección.

Los dichos Jefes y Consejos tendrán autoridad para velar por el cumplimiento de las citadas Leyes y dirigirse a los que en ellas se mencionan, denunciando las infracciones que descubran y ejerciendo la acción fiscal y educativa que conduzcan a su efectividad.

Art. 90. El Gobierno, con cargo al Presupuesto, se reserva el derecho de premiar, con cantidades proporcionadas a la magnitud del descubrimiento, a todas las personas que encuentren los me-

dios más eficaces para combatir con completo éxito todas las plagas de la agricultura que existen o puedan, en el porvenir, presentarse.

Art. 91. Quedan derogadas cuantas Leyes, Reglamentos y demás disposiciones se opongan a lo que se preceptúa en la presente Ley.

Por tanto:

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio a veintiuno de mayo de mil novecientos ocho.—
Yo EL REY.—El Ministro de Fomento, *Augusto González Besada*.

Noticia de algunas disposiciones complementarias.

Real decreto de 16 de diciembre de 1910 encargando a los Gobernadores civiles de la ejecución de la Ley de Plagas del campo.

Artículo 1.º Desde la publicación de este Real decreto quedan encargados los Gobernadores civiles de las provincias de la ejecución en las mismas de la vigente Ley de extinción de las plagas del campo y defensa contra ellas de 21 de mayo de 1908.

Art. 2.º Los suprimidos Jefes provinciales de Fomento darán cuenta justificada a este Ministerio de las cantidades cobradas en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 y 34 de la vigente Ley, así como de las que se hicieron cargo los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería, con arreglo al art. 40, procedentes del impuesto que estableció la Ley de defensa contra la filoxera de 18 de junio de 1885.

Art. 3.º Las dichas cuentas se someterán a la aprobación de la Dirección General de Agricultura, ingresándose, desde luego, el remanente que resulte en la Sucursal del Banco de España correspondiente, a nombre del nuevo Consejo provincial de Fomento, y a disposición de este Ministerio, que no podrá hacer uso de estos fondos más que para combatir las plagas en las provincias que los hubieren recaudado.

Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de mil novecientos diez.—ALFONSO.—El Ministro de Fomento, *Fermin Calbetón*.—(*Gaceta* de 17 de diciembre.)

*
**

El art. 1.º del Real decreto de 22 de enero de 1920 (*Gaceta* del 28), disponiendo quede redactado en la forma que se publica el de 6 de agosto de 1917 sobre la organización de los Servicios de Agricultura, incluye entre las funciones del Servicio técnico que serán desempeñadas por los Ingenieros agrónomos la siguiente:

«6.ª Hacer todo el servicio de dirección de las campañas de extinción de plagas del campo.»

En esta parte no fué modificada la redacción del Real decreto de 6 de agosto de 1917.

*
**

Por Real orden de 14 de julio de 1920 se ordenó a los Consejos provinciales de Fomento los siguientes extremos:

a) Formación obligatoria, según la Ley, y funcionamiento normal de todas las Juntas locales de plagas del campo;

b) Declaración por las mismas, durante el transcurso de cada año, de toda clase y número de plagas de cada término municipal, en incipiente y desarrollo, haciéndose un resumen, que se remitirá a este Ministerio, en una sucinta Memoria, que se redactará por el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica;

c) Conocidos los extremos anteriores, y previa la formación de un presupuesto, formulado por el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica, se procederá a un reparto del impuesto sancionado por la Ley de plagas, suficiente a satisfacer las atenciones que el estado de salubridad del campo requiera;

d) Detallando, para cada una de las plagas, los presupuestos en cada año necesarios, se formulará por los mismos funcionarios los presupuestos de enseñanza, extinción o campaña que el Consejo juzgue convenientes o necesarios, remitiéndose para su aprobación y provisión de fondos propios de los Consejos por este Ministerio;

e) Que estando obligados los Consejos a ingresar en las Sucursales del Banco de España, y a disposición de este Ministerio, las cantidades procedentes de las recaudaciones anuales, den conocimiento de cada ingreso parcial a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, a fin de que las cuentas corrientes del Banco y Sección de plagas se hallen de acuerdo en cada momento con las exactitudes necesarias y posibles;

f) Que, para la confrontación de dichas cuentas, se dé conocimiento, igualmente el 15 de enero y 15 de julio de cada año, del saldo oficial de la cuenta corriente en el Banco de España;

g) Que se procure que los gastos que ocasione la recaudación del impuesto no traspase los límites que ordinariamente se asignan a tales operaciones por el Estado.